



AL SERVICIO DE LA JUSTICIA Y DE LA PAZ SOCIAL

MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL ANTONIO MATOS RODELO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA UNITARIA DE DECISIÓN

Medellín, quince de julio de dos mil veintidós

PROCESO:	Incidente de Regulación de Honorarios
DEMANDANTE:	Martha Elena Montoya
DEMANDADO:	Amparo del Socorro Aristizábal Montoya
CUDR	05360 31 03 001 2018 00039 -01
RDO. INTERNO	084-21
INTERLOCUTORIO	112
TEMA Y DECISIÓN	En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, se pueden establecer las cláusulas que regirán el contrato de prestación de servicios profesionales; sin embargo, el artículo 76 del C.G.P., faculta al juez cognoscente del proceso donde se revoque el poder para regularlos a través de trámite incidental.

I. ASUNTO

Se procede a decidir la apelación formulada por la abogada Martha Elena Montoya Osorio, frente auto que resolvió el incidente de regulación de honorarios que propuso con relación a la labor que cumplió como apoderada de la señora Amparo del Socorro Aristizábal, dentro de la demanda de acumulación Verbal de Simulación instaurada por ésta en contra de la señora Diana Marcela Salazar Aristizábal.

II. ANTECEDENTES

1. Para fundamentar la solicitud, expuso la incidentista que había intervenido en el proceso de acumulación promovido por la señora Amparo del Socorro, por espacio de varios años ejerciendo su representación judicial; hasta que mediante escrito remitido el 24 de febrero de 2020, su poderdante había

presentado escrito manifestando desistimiento a las pretensiones de la demanda, conjuntamente con revocatoria del poder a ella conferido.

Explicó que dicha circunstancia se presenta debido a que el 13 de febrero de 2020, había recibido comunicación de la incidentada, informándosele sobre su decisión de desistir de dos de las demandas por ella formuladas, entre ellas la acumulación de simulación dentro de la cual se formula el incidente, por lo que se le solicitó coadyuvar los memoriales de desistimiento. Debido a lo anterior, solicitó que, ante la absoluta insolvencia de la misma, regularan los honorarios que se habían acordado en el contrato.

Sin embargo, señaló que en una nueva reunión efectuada el 13 de febrero de 2020, se reiteró la intención de finiquitar los trámites procesales y que los honorarios serían liquidados una vez aprobados los desistimientos respectivos; y ante la insistencia de regular los honorarios, el 21 del mismo mes y año, se recibió comunicación sobre la revocatoria en los dos procesos de simulación, lo que se cumplió efectivamente el 24 de febrero de 2020, la cual fue aceptada mediante auto del 23 de junio de la misma anualidad.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 76 del Código General del Proceso, presentó el incidente de regulación de honorarios, considerándose la gestión adelantada, el monto de lo pretendido y lo logrado, de cara al contrato de prestación de servicios celebrado.

Para tal efecto, informó que los inmuebles objeto del proceso, no habían sido avaluados comercialmente, pero que se habían estimado en la demanda en la suma de \$11.000.000.000, y que, además, reposaban en el expediente avalúos catastrales que eran un parámetro de referencia.

Relató que en el contrato de prestación de servicios, se habían pactado como honorarios el equivalente al doce por ciento (12%) del valor patrimonial obtenido y un pago de \$5.000.000 al momento de presentación de la demanda de declaración de unión marital, la cual había sido efectivamente cancelada el 26 de julio de 2016, estableciéndose que dicho porcentaje sería reconocido independientemente de que se consiguiera la recuperación patrimonial

procesal o extraprocesalmente; y que también formarían parte de sus honorarios las agencias en derecho y las costas procesales, libres de retención en la fuente; y finalmente, que en la cláusula sexta del dicho contrato se había pactado una indemnización del 50% sobre los honorarios pactados por terminación anormal del proceso por incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, y que en este caso su poderdante había incumplido con las obligaciones asumidas, incluyendo el no pago de sus honorarios.

Afirmó que, conforme a lo pactado con su poderdante, sus honorarios ascendían a la suma de \$360.000.000, que corresponde al 12% de \$3.000.000.000, compromiso con la parte final del cuarto párrafo de la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios.

Acorde con lo esbozado solicitó la fijación de los honorarios correspondientes a su gestión y se impusiera a la señora AMPARO DEL SOCORRO ARISTIZÁBAL MONTOYA el pago de la sanción por incumplimiento unilateral del contrato.

2. Del escrito se corrió traslado a la parte contraria quien se pronunció frente a los hechos enunciados en el escrito del incidente, en los siguientes términos:

Precisó que el poder para el inicio de la demanda de acumulación de simulación que le fue otorgado a la doctora MARTHA ELENA MONTOYA OSORIO, por la señora AMPARO DEL SOCORRO ARISTIZÁBAL MONTOYA, fue otorgado el 21 de noviembre de 2018, el cual inició a ejercer el 23 del mismo mes y año, cuando radicó la aludida demanda, y terminó el 24 de febrero de 2020, fecha en que se radicó memorial revocando dicho poder, conforme lo establecido en el inciso 1° del artículo 76 del Código General del Proceso; por tanto, su labor tuvo una duración de un (1) año, tres (3) meses y un (1) día, realizándose una relación de las actuaciones surtidas durante ese período.

En cuanto a las obligaciones contractuales adquiridas por la incidentista y la incidentada, indicó que el 4 de febrero de 2020, fecha en la que esta última ya había cumplido con dichas obligaciones, se acercó a la oficina de aquella para

informarle su decisión de desistir de dos de los tres procesos activos en contra de su hija y le solicitó que suscribiera el escrito de desistimiento de la demanda de acumulación, el 13 del mismo mes y año, mediante escrito autenticado le solicita nuevamente a su apoderada coadyuve los memoriales de desistimiento, obteniendo como respuesta, el reclamo de los honorarios de dicha profesional, desconociendo lo que habían pactado en el contrato en cuanto a la forma de pago.

Esto es, que comprendía el total de una gestión que iniciaba con la presentación de la demanda solicitando la declaratoria de la unión marital de hecho y su posterior liquidación, así como la simulación de la compraventa de una casa, por lo cual se cancelaría a la profesional la suma de \$5.000.000, el 26 de julio de 2016, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula segunda del contrato, lo que efectivamente se había cumplido, como lo confesó ella misma en el incidente; el resto de los honorarios, se pactó bajo la modalidad de cuota litis, conforme al inciso final de la cláusula segunda, es decir, sujeto a la condición de éxito de los procesos, la cual a la fecha no se ha cumplido y que al poder conferido incluso para el proceso de liquidación había renunciado la apoderada en audiencia del 4 de marzo de 2020, ante el JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DE MEDELLÍN.

En cuanto al proceso de simulación, manifestó que el incumplimiento de los deberes de la profesional del derecho había hecho, esto es, no coadyuvar su decisión de desistir de la misma, había conllevado a que el revocara dicho poder, pues pretendió modificar las condiciones de pago plasmadas en el contrato, presionando de manera indebida a su representada, con la firma de la referida coadyuvancia a la solicitud de desistimiento.

Precisó que las actividades confiadas a la abogada incidentista, comprendidas en el objeto del contrato de prestación de servicios profesionales, no dependían de un solo despacho judicial; ni que se había pactado el monto de los honorarios, ni su pago, por cada proceso, sino que se condicionó, a la obtención del derecho patrimonial reclamado.

Señaló que de acuerdo con la factura de impuesto predial aportada con la demanda de acumulación y que obraba a folios 50 de dicho cuaderno, los inmuebles estaban valuados así:

* 001-714181 en \$235.211.725

* 001-714183 en \$92.223.571

* Total = \$327.435.296

Por tanto, aduce que la diferencia entre este avalúo y el indicado por la abogada en este trámite, por \$10.672.564.704, conllevaba a la desestimación de la afirmación efectuada por dicha profesional, quien, además era quien había realizado el estimativo del valor de los derechos de su poderdante.

Arguyó que, para incorporar los valores de los bienes en discusión, se dependía de tres procesos:

1. El declarativo de la unión marital de hecho, el cual se encuentra en audiencia inicial (suspendida).
2. El declarativo de la simulación o nulidad del fideicomiso civil, que se encontraba para audiencia inicial.
3. El de liquidación de sociedad patrimonial de hecho, cuya procedencia dependía de la unión marital de hecho.

Es así, que expuso, que en el hipotético caso de que todos los juzgados donde se adelantaban dichos asuntos, accedieran a las pretensiones, le podría corresponder a la señora AMPARO DEL SOCORRO ARISTIZABAL MONTOYA, la suma de \$3.500.000.000 y no \$4.000.000.000, como lo estimó la incidentista.

Reiteró que se habían pactado unos honorarios mixtos, suma fija de \$5.000.000, pagadera a la presentación de la demanda de declaración de la unión marital, y cuota litis del 12% a liquidar sobre el "...valor patrimonial obtenido"; la primera, cumplida el 26 de julio de 2016 y la segunda, pende de

una condición que como se indicó no se ha cumplido, circunstancia que también aplica a lo pactado con relación a las agencias en derecho y costas procesales.

Finalmente, manifiesta que no se incumplió por la incidentada el contrato de prestación de servicios profesionales, por el contrario, quien incurrió en un incumplimiento fue la mandataria al oponerse a las directrices del mandante, negándose a efectuar el acto procesal que expresamente y por escrito le fue solicitado por aquélla, e incluso, supeditando su cumplimiento a un pago anticipado de los honorarios.

Con fundamento en los fundamentos fácticos narrados, propuso las siguientes excepciones:

1. **Incumplimiento del contrato:** Ante la negativa de coadyuvar los memoriales mediante los cuales se estaba desistiendo de dos de las demandas adelantadas por la mandataria.

2. **Inexistencia del derecho que se reclama:** Dado que la primera parte de los honorarios, cuota fija, fue cancelada oportunamente, y la segunda parte, cuota litis depende de que se verifique o no el cumplimiento de la condición, que es el éxito de los procesos.

En consecuencia, se solicitó fueran negadas las pretensiones formuladas por la abogada MARTHA ELENA MONTOYA OSORIO, dentro del presente trámite incidental.

II. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante providencia del 24 de agosto de 2021, el a quo resolvió desestimar la solicitud de la incidentista, consistente en la fijación de una suma adicional por la gestión realizada dentro de la acumulación de simulación que instauró en contra de la señora DIANA MARCELA SALAZAR ARISTIZÁBAL y otros; y fijó

como honorarios definitivos por dicha labor la suma de \$5.000.000, ya recibida por la profesional.

Cimentó el juez de primer grado la referida decisión en el hecho de que el valor de los honorarios fijados en el contrato de prestación de servicios profesionales fijada entre los aquí intervinientes, incluía la totalidad de las gestiones que se le encomendaron a la abogada incidentista, y no simplemente la relacionada con la acumulación de simulación, respecto de la cual se pretendía la regulación en este trámite, lo que no permitía determinar de manera cierta y concreta un monto adicional al ya cancelado, por la falta de claridad y expresividad en el contrato en ese sentido.

Aunado a lo reseñado, expuso que no obraban en el trámite de la acumulación actuaciones posteriores a la presentación de la demanda, que implicaran un despliegue importante por la peticionaria, para reconocer una suma adicional a la que ya le había sido pagada por la incidentada.

III. DEL RECURSO DE APELACIÓN

Oportunamente, la incidentista formuló recurso de apelación en contra de la decisión antes referenciada, argumentando que los planteamientos planteados en la misma eran contraevidentes, incoherentes, inexactos y carentes de equidad con la realidad y desarrollo de la relación contractual, pues desconocía la información documental arrimada al trámite incidental, en lo que respecta a los valores de los bienes, el texto de las condiciones del contrato, entre otras.

Aunado a lo expuesto, arguyó que había desconocido la labor que se había desarrollado por ella durante 15 meses, cuando dicho tiempo, a razón de un salario mínimo mensual vigente, arrojaba un valor de casi 15 millones de pesos, que no era fácil ganarse en el ejercicio de la profesión.

Igualmente, afirmó que se había desconocido por el juez de primer grado, la regulación contemplada en el acuerdo PSAA16 DE 2016 (SIC).

En consecuencia, solicitó se revocara la decisión y fueran acogidas las peticiones elevadas en este trámite incidental.

IV. PROBLEMA JURIDICO

Se deberá determinar dentro del presente incidente de regulación de honorarios, si el valor de \$5.000.000, cancelado por la señora AMPARO DEL SOCORRO ARISTIZÁBAL MONTOYA, a la abogada MARTHA ELENA SALAZAR ARISTIZÁBAL, cubrió los honorarios de ésta, correspondientes a la gestión realizada dentro del proceso de acumulación de simulación, hasta el momento en que le fue revocado el poder; o si en su defecto, debe fijarse un monto adicional a dicha suma, para reconocer la mencionada labor.

V. CONSIDERACIONES

1. El código civil, respeta y considera que la autonomía de la voluntad privada es la facultad que el mismo ordenamiento reconoce a los sujetos de derecho para disponer de sus intereses ocasionándose vínculos obligacionales, es decir a través de tales convenciones se crean derecho y se generan obligaciones, obviamente ajustadas al orden público y las buenas costumbres.

En ejercicio de tal autonomía privada pueden entonces los particulares¹:

- i) celebrar contratos o no celebrarlos, en principio en virtud del solo consentimiento, y, por tanto, sin formalidades, pues éstas reducen el ejercicio de la voluntad;
- ii) determinar con amplia libertad el contenido de sus obligaciones y de los derechos correlativos, con el límite del orden público, entendido de manera general como la seguridad, la salubridad y la moralidad públicas, y de las buenas costumbres;

¹ Corte Constitucional. Sentencia C-934/13

- iii) crear relaciones obligatorias entre sí, las cuales en principio no producen efectos jurídicos respecto de otras personas, que no son partes del contrato, por no haber prestado su consentimiento, lo cual corresponde al llamado efecto relativo de aquel.

Son entonces los contratantes quienes en ejercicio de la autonomía privada de la voluntad determinan el contenido y alcances de sus obligaciones.

Es así que, en este asunto, en ejercicio de dicha prerrogativa, la señora AMPARO DEL SOCORRO ARISTIZÁBAL MONTOYA, un contrato de servicios profesionales con la abogada MARTHA ELENA MONTOYA OSORIO, en el cual se contemplaron las siguientes cláusulas:

“Primera. Objeto. LA ABOGADA, de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación jurídica, utilizando sus propios medios, representará a la señora AMPARO ARISTIZÁBAL MONTOYA, en los siguientes procesos judiciales:

- Verbal de Declaración de unión marital de hecho con sociedad patrimonial y aplicación de la sanción del artículo 1824 del C.C. contra el señor JAIME SALAZAR HINCAPIÉ, identificado con la cédula de ciudadanía 3.311.255, el cual se tramitará ante los juzgados de Familia de Medellín.
- Liquidación de la sociedad patrimonial que en dicha unión se conformó.
- Verbal de simulación por la aparente compraventa de la casa de su propiedad, situada en el barrio EL POBLADO de Medellín, en la calle 12, No. 31 185, contra la hija, DIANA MARCELA SALAZAR ARISTIZÁBAL, que se adelantará entre los señores jueces civiles del circuito de Medellín.
- Cualquier otro que sea necesario adelantar para la obtención del derecho patrimonial que a la CONTRATANTE le asiste respecto de la convivencia que hizo con el demandado JAIME SALAZAR HINCAPIÉ.

Segunda. Honorarios. Las partes acuerdan como honorarios profesionales por la atención de los trámites descritos, el equivalente al 12% DEL VALOR PATRIMONIAL OBTENIDO y un pago de CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000), al momento de la presentación de la demanda de declaración de unión marital.

Dicho porcentaje se reconocerá bien que se consiga la recuperación patrimonial de manera procesal o de manera extraprocesal.

También formarán parte de los honorarios de **LA ABOGADA** las agencias en derecho y las costas procesales que se causen en los trámites, pagos que serán librs de retención en la fuente.

Para los efectos del presente contrato, las partes estiman provisionalmente el derecho que le pueda corresponder a la CONTRATANTE, en la suma de **CUATRO MIL MILLONES DE PESOS (\$4.000.000.000)**, suma ésta que puede ser menor o mayor una vez definido el conflicto, de manera procesal o extraprocesalmente.

Si por cualquier circunstancia, no es posible determinar el valor del derecho que le corresponde a la CONTRATANTE, las partes aceptan como valor del derecho la suma aquí expresada.”

No merece cuestionamiento alguno la existencia del contrato de prestación de servicios y el vínculo obligacional que se desprende del mismo, allí claramente se observa la intención de los contratantes. Lo que es materia de discusión como se planteó en el problema jurídico, es si debe señalarse a la profesional del derecho una suma adicional a la ya cancelada la mandante, por la gestión que realizó en la demanda de acumulación de simulación, ante la terminación de su labor, antes de definirse el conflicto, mediante la revocatoria que hizo su poderdante.

2. Acorde con lo plasmado en el negocio ya referenciado, y como quedó establecido en este trámite incidental, el mismo tenía como finalidad la prestación de los servicios profesional de la doctora MARTHA ELENA

MONTOYA OSORIO, respecto de varios asuntos judiciales, y no sólo con relación a la demanda de acumulación de simulación frente a la cual se solicitó la regulación de horarios.

En consecuencia, los honorarios fijados en el mismo, comprende la actuación que debía desarrollarse por la mencionada abogada en todos los procesos allí relacionados, respecto de los cuales se canceló el valor de \$5.000.000, que se pactó como suma fija, en el momento allí acordado.

Ahora, la otra parte de los honorarios, fue pactada en un porcentaje sobre el “VALOR PATRIMONIAL OBTENIDO”, es decir, sobre el valor de los bienes que, del patrimonio de la poderdante, se logaran recuperar, ya fuera de manera procesal o extraprocesalmente.

3. En principio para establecerse cuál es el monto que se debe pagar por los honorarios por una gestión profesional con ocasión de servicios de carácter jurídico, debe resolverse desde el sinalagma contractual.

Sin embargo, en este caso, no resulta viable acudir a las condiciones estipuladas en el contrato plurimencionado, para tal efecto, en razón de que, como se indicó con antelación, en éste se acordó el monto por dicho concepto, considerando que la gestión profesional se adelantaría hasta la definición del conflicto planteado; no obstante, conforme se indicó con antelación, ésta terminó de manera anticipada a lo acordado, mediante la revocatoria del poder. En este sentido, resulta preciso indicar, que no puede acogerse lo planteado por la incidentada, al pronunciarse frente a los hechos y pretensiones esbozados en el escrito contentivo del incidente, por cuanto, como viene de indicarse la parte de los honorarios que se determinaría con un porcentaje sobre el patrimonio que de la señora AMPARO DEL SOCORRO ARISTIZÁBAL MONTOYA, se lograra recuperar, se haría efectivo si la abogada realizaba su labor profesional hasta la definición del conflicto planteado, lo que no ocurrió en este asunto.

Por tanto, no es admisible considerar que, ante la terminación anticipada de la gestión profesional, la doctora MARTHA ELENA MONTOYA OSORIO, no

tendría derecho a la regulación de los honorarios por la labor realizada desde la presentación de la demanda hasta dicha terminación, por no haberse cumplido la condición allí señalada, esto es, la recuperación del patrimonio, o como lo coligió el a quo, que ante la indeterminación de dicho valor, no sería viable establecer un monto adicional al ya cancelado (\$5.000.000), por ese concepto.

Y es precisamente el desconocimiento del “VALOR PATRIMONIAL OBTENIDO”, sobre el cual se aplicaría el porcentaje, que no es viable acogerse a la forma como fueron acordados los honorarios profesionales en el respectivo contrato; aunado claro está, y como ya se expresó, a que no se completó con la actuación acordada en el mismo.

5. Por tanto, para resolver el conflicto resulta útil recurrir al Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016, por el cual se establecieron las tarifas de agencias en derecho. Este acto administrativo, entiende las agencias en derecho como las que corresponden a una contraprestación por los gastos en que se incurre para ejercer la defensa legal de los intereses dentro de un trámite judicial, en atención a la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente.

Así las cosas, tenemos que el artículo 5°, numeral 1° de dicho acuerdo, establece que, en los PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL, que se tramiten en primera instancia, cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario de mayor cuantía, como es el caso que nos ocupa, para determinar el valor que corresponda por tal concepto, se debe tomar como referente entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.

6. Ahora, es necesario precisar que, dado que como el objeto de este incidente es regular los honorarios por la gestión realizada por la profesional del derecho en este el proceso de acumulación de simulación, serán las pretensiones de este asunto las que tomarán como base para la determinación de dicho aspecto, conforme pasa a indicarse:

- Se pretendió, de manera principal, declarar la simulación del fideicomiso civil constituido por JAIME SALAZAR HINCAPIÉ a favor de DIANA MARCELA

SALAZAR ARISTIZÁBAL, respecto de los inmuebles con matrículas Nos. 001-714181 y 001-714183; y en consecuencia, se ordenara que dichos bienes regresaran al patrimonio del citado señor; y como consecuencia, se condenara a esta última, a la restitución y pago de los frutos causados, entre la muerte del constituyente y el momento de la efectiva restitución de los bienes, a razón de 7.729.878 mensuales (01.DemandaDeAcumulación. Fol. 22 y 23).

- De acuerdo con la factura de impuesto predial aportada con la demanda (01.DemandaDeAcumulación, Fol. 63), el valor catastral de dichos bienes es:

✓	001-714181	—————→	\$235.211.725
✓	001-714183	—————→	\$92.223.571
✓	TOTAL	—————→	\$327.435.296

- Para efectos de establecer el valor comercial de dichos bienes, se aplicará, en armonía, el método contemplado en el numeral 4° del artículo 444 del Código General del Proceso, para lo cual se tomará el avalúo catastral incrementado en un 50% (\$327.435.296 x 50%), arrojando como resultado la suma de \$491.152.944.

- Para determinar el valor de la pretensión consecuencial, se considerará que entre la fecha de fallecimiento del señor JAIME SALAZAR HINCAPIÉ y la fecha en que fue revocado el poder a la abogada aquí reclamante, transcurrieron aproximadamente 28 meses, a razón de 7.729.878 mensuales, ascendiendo a la suma de \$216.436.584.

En consecuencia, el valor total de lo que se buscaba reintegrar al patrimonio del citado señor, sería \$707.869.168, de los cuales sólo la mitad, eventualmente le correspondería a la señora AMPARO DEL SOCORRO ARISTIZÁBAL MONTOYA, esto es, la suma de \$353.934.584, que equivaldría al monto que pretendería recuperar de su patrimonio.

7. En cuanto al porcentaje a aplicar, tenemos que el acuerdo establece un mínimo y un máximo, para la fijación de agencias, que oscila entre el 3% y el 7.5%, que es determinado por los aspectos que en el mismo se relacionan,

pero bajo la consideración del agotamiento de todas las etapas; no obstante, como ya se indicó en este caso, la labor de la apoderada judicial, terminó antes de culminar el proceso, alcanzando sólo a presentar la demanda, notificar el auto admisorio y replicar el recurso de reposición formulado por la demandada en contra del auto que concedió el amparo de pobreza, actuación que demoró alrededor de 15 meses, como finalmente quedó aceptado por ambos extremos en este asunto.

Por tanto, tomará como referencia esta Corporación para la regulación de los honorarios en este caso, un porcentaje inferior al que se contempla como mínimo, dada la terminación anticipada de la labor profesional, y que refleje en promedio el valor de la actuación parcial que fue adelantada por la abogada, de cara a las etapas procesales, el cual será el 2%.

Así las cosas, aplicando dicho porcentaje sobre el valor de lo que pretendía recuperar la señora AMPARO DEL SOCORRO ARISTIZÁBAL para su patrimonio, con la demanda de acumulación de simulación, tendríamos como resultado la suma de **\$7.078.691**, valor que se fijará como honorarios de la abogada MARTHA ELENA MONTOYA OSORIO, por la labor desarrollada en dicho asunto.

Consecuente con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en Sala Unitaria de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

VI. RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la providencia proferida en providencia del 24 de agosto de 2022, proferida por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ITAGUÍ, mediante el cual se decidió el presente incidente de regulación de honorarios, formulado por la abogada MARTHA ELENA MONTOYA OSORIO, en contra de la señora AMPARO DEL SOCORRO ARISTIZÁBAL MONTOYA, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: En su lugar, **SE FIJA** la suma de SIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$7.078.691), como honorarios profesionales pendientes de cancelar a la abogada MARTHA ELENA MONTOYA OSORIO.

TERCERO: CONDENAR a la señora AMPARO DEL SOCORRO ARISTIZÁBAL MONTOYA, a pagar a favor de la doctora MARTHA ELENA MONTOYA OSORIO, el valor de los honorarios indicados en el ordinal anterior.

CUARTO: Sin condena en costas dadas las results del recurso.

QUINTO: En firme la presente, devuélvase el expediente digital a su lugar de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rafael A. Matos Rodelo', written in a cursive style.

RAFAEL ANTONIO MATOS RODELO
MAGISTRADO